

La verdad y la memoria para la sostenibilidad democrática

Dra. María Teresa Villarreal Martínez

Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Nuevo León

terevisa@yahoo.com

Introducción

Cuando la desaparición de personas es un problema que afecta a miles de personas en determinado periodo y se convierte en un agravio generalizado y sistemático hacia la población, ya sea que ocurra con la participación directa del Estado o simplemente con su tolerancia, puede llegar a considerarse un delito de lesa humanidad. Esta problemática genera el deterioro generalizado de los derechos civiles, y así no es posible la existencia de ciudadanos; sin estos últimos, hablar de democracia se convierte en una ficción. No hay ciudadanos ni democracia, porque la desaparición de miles de personas frustra las capacidades más elementales de los individuos y la población para vivir y también para emprender proyectos vitales.

La situación se agrava con la impunidad persistente, atribuible no solo a la posible complicidad entre autoridades y delincuencia sino sobre todo a la falta de capacidades institucionales para reconocer el problema, llevar a cabo investigaciones eficientes, sancionar a los responsables y reparar los daños infligidos a las víctimas. La importancia de destacar este aspecto se relaciona con las obligaciones del Estado mexicano en el marco de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, referentes a respetar, proteger y hacer efectivo el goce de los derechos fundamentales para las personas que se encuentran en su territorio (OACNUDH, 2006).

Este trabajo reflexiona sobre la vinculación entre democracia y la lucha por los derechos a la verdad y la memoria. Se examina tanto la demanda de justicia de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Nuevo León, como las respuestas estatales ante el problema. Este análisis se realiza a la luz del derecho a la verdad, partiendo de los planteamientos que

sobre este tema se han vertido en distintos instrumentos de derechos humanos. Sin verdad, no hay justicia ni Estado de derecho, por lo que la sostenibilidad de la democracia está en riesgo.

Dentro de la literatura sobre sustentabilidad es escasa la referencia a la perspectiva política, pues el énfasis está puesto primordialmente en los aspectos medioambientales y económicos. Pero la sustentabilidad abarca al mismo tiempo aspectos culturales, sociales y políticos. Más aun, la idea de que una democracia sea sostenible lleva a ir más allá de los parámetros tradicionales de elecciones y división de poderes, y remite al campo de la garantía estatal y el ejercicio universal de los derechos fundamentales. Sin embargo, en contextos de elevada violencia, inseguridad pública e impunidad, la vulneración de derechos humanos pone a prueba la institucionalidad democrática, y con ello la credibilidad del discurso y emprendimientos en torno al desarrollo sustentable en general.

Dentro de esta perspectiva destacamos el principio de la rendición de cuentas que, en el caso de graves violaciones a derechos humanos, tiene como centro la garantía de tres derechos interconectados: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación (Pillay, 2012). La rendición de cuentas es la clave para recuperar la confianza social en la justicia y restablecer el Estado de Derecho. Pero para que sea eficiente y sostenible requiere del involucramiento del gobierno con voluntad política y reconociéndose como titular de obligaciones por un lado, y por otro, de la sociedad civil, en especial las personas titulares de derechos que han sido afectadas, con capacidad para demandar explicaciones y sanciones. Para la obtención de información recurrimos a la revisión hemerográfica por internet, *blogs*, perfiles de *facebook* y sitios oficiales de estos grupos, de documentos e informes de organismos de derechos humanos y de autoridades gubernamentales en relación con la atención al problema de la desaparición de personas, así como la observación directa de algunas acciones emprendidas por familiares de personas desaparecidas.

Derecho a la verdad y democracia

Ante graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de la desaparición de personas, el establecimiento de responsabilidades se relaciona con el ejercicio de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, considerados éstos no separadamente sino de manera interrelacionada.

En cuanto a la desaparición de personas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha señalado que los Estados deben rendir cuentas sobre el cumplimiento de las siguientes responsabilidades (CIDH, 2014: 30):

- Realizar de oficio una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas a fin establecer la verdad de lo sucedido.
- Investigar y sancionar a los responsables.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece que los Estados Partes se comprometen, entre otras cosas, a:

- Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo – artículo 1.

En tanto que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señala entre los compromisos de los Estados:

- adoptar todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos – artículo 24
- Garantizar el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas – artículo 24.

Estas obligaciones también aplican en los casos de desapariciones realizadas por particulares, ya que en el artículo 3 de la misma Convención Internacional se indica que los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar las desapariciones “que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del

Estado, y para procesar a los responsables”. Además, la Corte Interamericana ha establecido que la obligación de investigar se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado” (De León, et. al., 2010: 2).

Estas responsabilidades, por las cuales el Estado debe rendir cuentas, están vigentes hasta que no se esclarezcan los casos de desaparición de personas, pues la Convención Interamericana establece que el delito de desaparición tiene un carácter continuo o permanente –artículo 3–, ya que mientras no se dé con el paradero de la víctima su desaparición se actualiza constantemente. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, COIDH, ha señalado que, sin importar cuándo se dieron los hechos de la desaparición, la obligación de investigar por parte del Estado continúa en tanto no se identifiquen fehacientemente los restos de la persona, o sea encontrada con vida.¹

Este derecho a la verdad tiene una doble dimensión individual y colectiva, ya que corresponde tanto a las víctimas como a la sociedad en su conjunto. Por un lado se trata del derecho individual de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones de sus derechos; por otra parte es también el derecho de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido, esto tiene que ver con investigar los hechos y divulgar públicamente los resultados de las investigaciones y procesos penales, así como reconocer que la historia de opresión forma parte del patrimonio común que debe ser preservado en la memoria colectiva a fin de evitar la repetición de esas atrocidades así como el surgimiento de tesis revisionistas –que pretendan justificar las violaciones– y negacionistas –que apuesten al olvido (ONU, 2005).

¹ COIDH, *Caso Anzualdo Castro vs Perú*. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, numeral 185, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_202_esp.pdf; COIDH, *Caso ChitayNech y otros vs Guatemala*. Sentencia de 25 de mayo de 2010, numerales 240 y 241, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf; COIDH, *Caso Gelman vs Uruguay*. Sentencia de 24 de febrero de 2011, numeral 258, disponible en www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.doc (consultados el 18 de abril de 2018).

Por último, es importante señalar que la CIDH (ONU, 2006) ha señalado que el Estado democrático requiere de la garantía del derecho a la verdad, lo contrario entorpece el funcionamiento de las instituciones y su credibilidad.

Estrategias en la búsqueda de la verdad

Desde 2001, la conformación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas sigue la geografía de la violencia atribuida a los cárteles del narcotráfico y del combate militarizado por parte del Estado: Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Durango, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sonora²; más recientemente también han surgido grupos similares en el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala. Cada uno de estos más de 60 grupos ha recurrido a diferentes estrategias encaminadas a exigir cuentas a las autoridades gubernamentales y, por tanto, a demandar su derecho a saber qué ocurrió con sus seres queridos. Estas acciones se han registrado fuera de cualquier marco legislativo, tomando en cuenta que las primeras referencias en medios informativos a las acciones públicas de estos grupos datan de 2001 en Ciudad Juárez –Chihuahua–, Tijuana –Baja California– y Culiacán –Sinaloa.

Estas acciones pueden agruparse de la siguiente forma (Villarreal, 2014):

- a. Registro y documentación de casos, elaboración y difusión de informes sobre la incidencia del problema en distintos contextos locales.
- b. Denuncia pública mediante plantones, marchas portando carteles y mantas con las fotografías de las persas desaparecidas, conferencias de prensa, jornadas de ayuno y huelgas de hambre. Además de las plazas y calles, la denuncia pública se extiende ampliamente por

² Estas entidades coinciden con los lugares donde se emprendieron “operativos conjuntos” policiaco–militares en el último año del gobierno del presidente Vicente Fox –entre 2005 y 2006–, y durante todo el sexenio de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012.

internet: a través de blogs, de redes sociales, de medios de comunicación alternativos, estos colectivos emiten sus propios comunicados y difunden los casos de víctimas de desaparición.

c. Interlocución con autoridades: desde diálogos informales a pie de banquetta, hasta reuniones formales de trabajo para examinar el avance en las investigaciones de los casos de personas desaparecidas.

d. Impulso de marcos legales para el reconocimiento de los derechos de las víctimas, la tipificación de delito de desaparición forzada de personas, así como diversas medidas de apoyo a los familiares que enfrentan una serie de problemas económicos y sociales a partir de la desaparición de su ser querido y requieren el reconocimiento jurídico de la declaración de ausencia por desaparición sin que esto equivalga a declaración de muerte.

e. Búsqueda directa de desaparecidos. Esta actividad ha llevado al descubrimiento de decenas de fosas clandestinas en el país.

f. Creación de redes con otros colectivos de víctimas y con organizaciones civiles que acompañan y apoyan la causa de las personas desaparecidas. En 2010, varios colectivos de familiares integraron la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, junto con organizaciones populares y de derechos humanos. En marzo de 2015 se conformó el Movimiento por nuestros Desaparecidos en México que integran colectivos de familiares de víctimas y organizaciones que les brindan acompañamiento y apoyo. En 2016 se conformó la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas integrada por colectivos de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y Baja California que se dedican a la localización de restos y fosas clandestinas. Otras redes de colectivos con presencia en varios estados son la Red Eslabones por los Derechos Humanos y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México FUNDEM. También se han conformado algunas redes estatales, como la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas.

g. Construcción de la memoria: la campaña nacional de bordados por la paz en distintas plazas públicas del país en donde confeccionan pañuelos con los nombres de las personas desaparecidas; apropiación de espacios público como memoriales; publicación de libros y videos testimoniales sobre las víctimas.

Exigencia de cuentas y eficacia institucional

En el caso de Nuevo León, donde oficialmente hay 2,919 personas desaparecidas –según la última cifra ofrecida por el RNPED³ al cierre del 30 de abril 2018-, en los últimos 10 años se han conformado dos colectivos de familiares de víctimas que han utilizado las estrategias enlistadas en el apartado anterior en su lucha por conocer la verdad sobre lo que pasó con sus familiares desaparecidos y obtener justicia y reparación.

Estos grupos son la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Desaparecidos y Secuestrados de Nuevo León –AMORES–, y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, FUNDENL.

Con el acompañamiento de la asociación civil CADHAC, el trabajo de AMORES se ha centrado en la interlocución con las autoridades de la Procuraduría, -ahora Fiscalía- para revisar los expedientes de investigación y dar seguimiento a los trabajos de los agentes ministeriales. Entre 2011 y 2018 llevaron a cabo 30 reuniones de trabajo (CADHAC, 2018, enero 31), en cada una participaron los familiares de las víctimas asesorados por CADHAC, y los agentes del Ministerio Público encargados de realizar las diligencias. Solamente durante 2011 y 2015, el titular de la Procuraduría se involucró en estas sesiones, con el cambio de gobierno el nuevo procurador dejó de participar personalmente. En esas reuniones se revisaban los expedientes de investigación de casos de desaparición de personas; allí los familiares pedían explicaciones directamente a los agentes del Ministerio Público sobre las diligencias que han realizado, y sugerían nuevas acciones que ayudaran a encontrar a sus seres queridos. Al finalizar cada encuentro se asumían compromisos por parte de la autoridad cuyo cumplimiento se revisaba en la siguiente reunión (Villarreal, 2015).

³ El RNPED quedó abrogado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el último corte corresponde al 30 de abril 2018. La Ley General establece que la información del RNPED será trasladada a un nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, que al cierre de esta ponencia aún no ha sido dado a conocer.

Este modelo de trabajo colaborativo entre familiares de víctimas de desaparición y autoridades ministeriales ha sido considerado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, GTDFI, una buena práctica que favorece el papel de los familiares de las víctimas en las investigaciones (ONU, 2015, septiembre 11). De parte de la FGJNL no hay información pública disponible acerca de los resultados de estas reuniones de interlocución con familiares de personas desaparecidas. Por su parte, CADHAC sí ofrece información pública sobre los resultados de estas reuniones de trabajo. De acuerdo con el boletín emitido por la organización el 30 de agosto de 2017:

en las primeras 28 reuniones –entre junio 2011 y abril 2017– se revisaron expedientes correspondientes a 236 personas desaparecidas, además, como resultado de ese trabajo conjunto entre familiares, autoridades y CADHAC se consignaron 63 personas, se ha localizado a 169 personas –75 con vida y 94 sin vida que fueron identificadas por ADN (CADHAC, 2017, agosto 30).

No hay información disponible sobre expedientes revisados en las reuniones 29 y 30 que se efectuaron en diciembre de 2017 y enero de 2018 respectivamente.

A partir de la reunión número 28 realizada el 27 de abril de 2017 se efectuó un cambio en la metodología de trabajo, según lo refiere CADHAC en un comunicado de prensa:

“En esta ocasión, además de la revisión habitual, se utilizó un nuevo método de trabajo buscando identificar otras variables de información para la localización de personas. Si bien, el método de revisión de casos como se había venido realizando, seguirá funcionando, este nuevo método pretende conocer de manera integral el contexto social de violencia que se desarrolló en el estado a partir de 2007 y comprender el papel que jugaron los actores involucrados. Esperamos que este nuevo camino nos permita acercarnos a la verdad y encontrar justicia para estas víctimas y sus familiares” (CADHAC, 2017, abril 27).

No hay experiencias similares que sirvan para comparar si los resultados logrados con este mecanismo de trabajo colaborativo son suficientes o no. El GTDFI no especifica bajo qué criterios es que considera la experiencia de Nuevo León una buena práctica, solo lo afirma. Sin duda, como ya se señaló en otro apartado, en instrumentos internacionales y la misma Corte Interamericana han señalado que es indispensable la participación de las víctimas y sus familiares en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, y específicamente de desapariciones. Pero también se advierte que esa participación se ha de buscar no como mera colaboración, sino como medio para esclarecer la verdad y así acceder a la justicia y la reparación.

En Nuevo León, además de AMORES, hay otra agrupación de familiares de personas desaparecidas que también ha emprendido la lucha pública por encontrar a sus seres queridos. En 2012, una de las integrantes de lo que antes era LUPA –Leticia Hidalgo, quien busca a su hijo Roy desaparecido en 2011– decidió iniciar otro grupo de familiares y se crea Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, FUNDENL, con el apoyo de integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC, organización que surgió en 2009 en esa entidad. Desde su creación, FUNDENL ha realizado plantones frente al Palacio de Gobierno para demandar del titular del Ejecutivo la atención a los casos de desaparición, en esas ocasiones las integrantes del colectivo suelen bordar pañuelos con los nombres de sus seres queridos que luego exhiben ante el público; con esta acción, el colectivo mantiene viva la campaña Bordando por la Paz que inició en 2011 en Coyoacán y se extendió a muchas plazas del país (Ábrego, 2017, agosto 30; Cubero, 2016, agosto 30; Patraca, 2013, enero 10).

En enero de 2014, FUNDENL “toma” la plaza conocida como “El Breve Espacio”, localizada en Washington y 5 de Mayo, y desde entonces la denominan Plaza de los Desaparecidos. En una escultura de cristal dedicada a la transparencia ubicada al centro de una fuente que se encuentra en el lugar colocaron 13 calcas con los nombres de 13 de sus seres queridos desaparecido (De la Fuente, 2016, enero 10). Un mes después colocaron una placa para recordar a los desaparecidos. De este modo, convirtieron la plaza en un memorial, en un

espacio a la vez de denuncia y de recuerdo. Sin embargo, en abril de ese año las calcas fueron retiradas por desconocidos, pero los integrantes de Funden volvieron a colocar otras nuevamente. A partir de entonces, en este sitio se reúnen semanalmente para continuar bordando pañuelos que conmemoran a cada uno de los desaparecidos (*Sin Embargo*, 13 de abril 2014).

De las acciones que emprende FUNDENL hay tres que abordamos en este trabajo por su relación con la participación de las víctimas en el esclarecimiento de la verdad. Esas acciones son las mesas de evaluación de investigaciones efectuadas a partir de 2014 de manera esporádica, la realización de brigadas de búsqueda en campo y la activación de mecanismos de rendición de cuentas.

Entre agosto de 2014 y julio de 2015, FUNDENL participó en mesas de trabajo con la PGJNL para evaluar la investigación que realiza el ministerio público en ocho casos de desaparición. Tras 10 meses de reuniones, el colectivo consideró insuficiente el trabajo de la autoridad. Con la llegada de la administración estatal encabezada por Jaime Rodríguez Calderón en octubre de 2015, FUNDENL reanudó las mesas de trabajo, pero de nuevo encontró ineficiencia y falta de recursos de la PGJNL para emprender las investigaciones. Puesto que considera insuficiente la investigación de las autoridades para localizar a los desaparecidos, el colectivo ha emprendido lo que llaman brigadas de búsqueda independiente en campo. Entre 2015 y 2016 realizaron cinco brigadas en las que han encontrado restos de al menos una persona reportada como desaparecida y que ya ha sido identificada mediante pruebas genéticas (FUNDENL, 2015, noviembre 06; Peña Calvillo, 2016, diciembre 04).

Ante lo que consideran la inoperancia de la PGJNL, FUNDENL ha recurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar quejas contra la Procuraduría, y ha logrado que el ombudsman emita cuatro recomendaciones⁴ relacionadas con cuatro casos que acompaña

⁴ Recomendaciones 6/2017, 7/2017, 15/2017 y 18/2017.

este colectivo, donde se señala a la PGJNL como responsable de omitir respetar el derecho de acceso a la justicia y dilación en las investigaciones.

FUNDENL no recibe un acompañamiento formal y constante de alguna organización civil de derechos humanos, son los mismos familiares de las víctimas quienes directamente aparecen en el espacio público emitiendo declaraciones, interactuando con autoridades, realizando denuncias, eso les ha dado visibilidad y protagonismo.

La respuesta del Estado ante las desapariciones

Las respuestas estatales ante las desapariciones ocurridas en Nuevo León han sido empujadas por las acciones que los colectivos de familiares realizan en calles, plazas y en internet: denuncias públicas, marchas, plantones, vigiliass, recolección de casos, exposición de fotografías de las víctimas, murales callejeros.

Resultado de las presiones ejercidas por AMORES y FUNDENL, el gobierno y el Congreso de Nuevo León pasaron de la indolencia inicial a emprender acciones encaminadas a atender el problema de la desaparición de personas:

- a) Mesas de seguimiento de casos, de 2011 a 2018.
- b) Tipificación del delito de desaparición forzada, en diciembre 2012.
- c) Elaboración del Protocolo de Búsqueda Inmediata, y creación del GEBI Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, en 2014.
- d) Declaración de ausencia por desaparición, en 2015.
- e) Mesas de evaluación de investigaciones, a partir de 2014 de manera esporádica.
- f) Acompañamiento de agentes periciales en las brigadas de búsqueda en campo realizadas por familiares, en cuatro ocasiones entre 2015 y 2016.

Las tres primeras acciones han sido destacadas por el GTDFI como buenas prácticas que recomienda sean replicadas en otras entidades del país. Son respuestas estatales impulsadas

por AMORES y CADHAC, aunque en lo referente a tipificación del delito de desaparición forzada FUNDENL también presentó su iniciativa pero no fue tomada en cuenta.

En cuanto a la declaración de ausencia por desaparición, los dos colectivos de familiares presentaron sus iniciativas, pero la que prevaleció fue la impulsada por AMORES y CADHAC. Las dos últimas acciones estatales enlistadas se ejecutaron a instancias de FUNDENL, y sobre ellas no hay mención en el documento del GTDFI.

Las acciones emprendidas por el gobierno de Nuevo León frente al problema de la desaparición de personas, revelan que se trata más bien de reacciones ante la presión ejercida por los familiares de las víctimas y que por tanto tienden a diluirse en el tiempo y quedar si acaso como buenos propósitos.

No se trata de una asunción responsable del problema público y por tanto de la búsqueda de respuestas que constituyan políticas perdurables en el tiempo para detener el problema y facilitar el acceso a la justicia para las víctimas.

La tipificación de la desaparición forzada, el establecimiento de mesas de seguimiento de expedientes de investigación, la elaboración de procedimiento de búsqueda son fruto de iniciativas ciudadanas que han logrado sacar por momentos a la maquinaria estatal del mutismo y la inacción cómplice que hace perdurable la desaparición impune de mujeres y hombres. Pero esa acción estatal es momentánea, como lo muestra por ejemplo la ineficiencia del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata constatada por un monitoreo realizado por CADHAC que solo resultó efectivo un año y después se volvió inoperante (CADHAC, 2017).

Las mesas de seguimiento a expedientes de investigación sobre casos de desaparición, aunque constituyen una novedosa experiencia de interlocución e incidencia de los familiares de las víctimas en el trabajo de procuración de justicia, enfrentan también la indolencia gubernamental cuando la falta de voluntad política prevalece y resta importancia a este trabajo, como ha ocurrido con el gobierno de Rodríguez Calderón a partir de octubre de 2015.

Además, aunque las mesas de interlocución se han realizado de manera periódica desde 2011, la mayor parte de las y los desaparecidos siguen sin ser localizados. También es importante destacar que más de cinco años de experiencia de interlocución no han significado un cambio en la forma de trabajar de la FGJNL para con todos los familiares de personas desaparecidas, pues las mesas de interlocución solo se realizan con algunos, con aquellos que las impulsaron –CADHAC y AMORES–, pero la Fiscalía no da este mismo trato a las demás víctimas que no están organizadas. Es decir, se trató de una interlocución bajo demanda y presión de las víctimas, no como una nueva forma de actuar de la FGJNL para atender estos

Reflexiones finales

Ante la desaparición de personas la exigencia de cuentas de los familiares de las víctimas se refiere al esclarecimiento de la verdad, esto implica el derecho a saber el paradero de sus seres queridos, conocer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y saber quiénes son los responsables. Con la verdad, inicia apenas el camino de acceso a la justicia y la reparación.

La rendición de cuentas del Estado ante los casos de desaparición de personas solo es completa cuando mediante una investigación eficaz se logra esclarecer toda la verdad y se da a conocer a los familiares de las víctimas y a la sociedad entera, solo así se procura justicia y puede plantearse la reparación para las víctimas y medidas para la no repetición.

Con la entrada en vigor en enero de 2018 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el reto de la rendición de cuentas como esclarecimiento de la verdad queda a cargo de las comisiones de búsqueda y las fiscalías especializadas que se creen a nivel Federal y en cada entidad federativa. En el caso de Nuevo León, el 13 de junio de 2018 se publicó el decreto de creación de la Comisión Local de Búsqueda, que inició operaciones el 01 de julio, pero el nombramiento de su titular recibió ya la crítica del colectivo FUNDENL (Newsweek Nuevo León, 01 junio 2018) que considera que no cumple con el perfil requerido.

En este trabajo hemos revisado una de las estrategias que colectivos de familiares de personas desaparecidas en Nuevo León han utilizado para exigir cuentas y conocer la verdad, se trata de la interlocución formal con autoridades ministeriales para revisar el trabajo de investigación que realizan e impulsar avances que conduzcan a dar con el paradero de las víctimas. Esta estrategia se encuadra dentro de la lucha por el derecho a la verdad que contempla la participación de familiares en las indagaciones sobre graves violaciones a derechos humanos. También hemos revisado una de las estrategias implementadas por el gobierno de esta misma entidad federativa que consiste en la creación e implementación de un procedimiento de búsqueda inmediata. La importancia de esta acción estatal radica en que el derecho a la verdad está vinculado con la realización de investigaciones eficaces y oportunas, como una forma de rendir cuentas.

Aunque el GTDFI ha calificado como buenas prácticas las reuniones de trabajo entre la PGJNL y familiares de víctimas, no se encontraron criterios para determinar por qué o para quiénes esa práctica es positiva, más allá de generar colaboración y no confrontación. Este método de interlocución solo se ha aplicado a algunos casos acompañados por CADHAC, pero la mayoría de los casos de desaparición en Nuevo León no son atendidos de esta forma. En cuanto a la localización de las víctimas, en el 70 por ciento de los casos las víctimas han sido encontradas, casi en la misma proporción vivas que sin vida. Pero en la identificación de responsables se ha avanzado poco, pues desde hace tres años se ha dado la misma cifra de 63 personas consignadas como presuntas responsables. La calidad de las investigaciones no ha sido la suficiente como para conocer el paradero de gran parte de las víctimas, de manera que la cifra de personas no localizadas sigue en aumento. El mecanismo de participación de familiares de las víctimas en las investigaciones sigue sin asumirse como método rutinario de trabajo por la PGJNL, sino que constituye el mecanismo de trabajo que se ha establecido solamente con algunos familiares organizados. Luego de más de seis años de experiencia de interlocución no han significado un cambio en la forma de trabajar de la PGJNL para con todos los familiares de personas desaparecidas, pues las mesas de interlocución solo se realizan con algunos, con aquellos que las impulsaron –AMORES con el acompañamiento y asesoría de CADHAC–, pero la autoridad no da este mismo trato a las demás víctimas que

no están organizadas. Es decir, se trata de una interlocución bajo demanda y presión de las víctimas, no como una nueva forma de actuar de la PGJNL para atender estos casos.

La eficacia de los procesos investigativos no es contundente. La información proporcionada por la PGJNL indica que en gran parte de los casos denunciados de manera inmediata como desapariciones las víctimas regresan a su domicilio sin que eso pueda atribuirse al trabajo del GEBI. Por otro lado, la organización FUNDENL ha denunciado la ineficacia de los procedimientos de investigación en algunos casos, y CADHAC encontró que el Procedimiento de Búsqueda Inmediata no se aplicó por lo menos entre 2015 y 2016. Por tanto, no basta con que un gobierno elabore procedimientos y protocolos que puedan constituir una buena práctica, es necesaria la constante vigilancia y monitoreo independiente de la actuación gubernamental. La participación colaborativa de los familiares en las investigaciones es indispensable, pero también lo es su intervención crítica y vigilante para señalar deficiencias y exigir que los procesos investigativos, primero, se lleven a cabo, y segundo pero no menos importante, que se efectúen no como meros formalismos que engrosan expedientes con acumulación de acciones infructuosas, sino firmemente orientados a desentrañar los hechos ocurridos hasta encontrar a las víctimas y los responsables. Esta calidad de investigación es escasa. El número de víctimas que según datos oficiales siguen sin ser localizadas sigue en aumento mes a mes, de acuerdo al RNPED. El ritmo de crecimiento de esta tragedia es un reflejo de la falta de capacidades estatales para reconocerla y afrontarla, y se traduce en una inexistente rendición de cuentas frente al problema de la desaparición de personas.

Hace falta también mayor iniciativa del organismo público de derechos humanos para emprender de oficio investigaciones y no solo ante la interposición de quejas. La elaboración y difusión de informes especiales sobre el tema de las desapariciones abonaría al impulso de un trabajo de reconstrucción de la verdad enfocado a la toma de conciencia de la sociedad de que el derecho a saber es también suyo, de toda la colectividad.

El reconocimiento del problema de las desapariciones y sus dimensiones cuantitativa – incidencia– y cualitativa –identificación de patrones, contextos y estructuras que favorecen este delito– es un paso preliminar e indispensable para el acceso a la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Pero si no se sabe ni siquiera cuántas personas están desaparecidas y no se aplican los protocolos de investigación, no hay condiciones creíbles para que el Estado garantice la no repetición de un problema que no conoce ni afronta, y por tanto, sobre el cual no rinde cuentas. Esta ausencia de rendición de cuentas representa la impunidad prevaleciente ante la falta de investigación sobre la verdad.

El derecho a saber sigue siendo inaccesible para numerosas víctimas cuyos casos simplemente no avanzan, y el derecho colectivo a la verdad que tiene la sociedad está más lejos de estar garantizado.

La crisis de derechos humanos que prevalece en México tiene nuevas manifestaciones como es el hallazgo de numerosas fosas clandestinas en distintos puntos del país, que ha puesto en evidencia la falta de capacidades técnicas de gran parte de los gobiernos estatales para afrontar la tarea de identificación de restos con lo que se alejan las posibilidades de conocer paradero de miles de víctimas de desaparición. La impunidad prevalece también ante el escaso avance de los procesos investigativos, la lentitud con que se implementan los mecanismos contemplados en la Ley General como son las comisiones locales de búsqueda, y la carencia de recursos para realizar las tareas de localización de víctimas. La administración federal que entró en funciones en diciembre de 2018 tiene un enorme reto porque si la impunidad y la falta de resultados continúa como en los 12 años anteriores, será cada vez mayor la desconfianza hacia las instituciones de justicia y la capacidad del Estado para cumplir con su obligación de garantizar derechos fundamentales a la población.

Bibliografía

Ábrego, Miriam (2017, agosto 30) “Sin avance en identificación de restos en García: FUNDENL”, *El Horizonte*. Disponible en <http://www.elhorizonte.mx/local/sin-avance-en-identificacion-de-restos-en-garcia-fundenl/1945977> [Consultado el 12 de mayo de 2019].

CADHAC, (2017) *Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata. Balance abril 2015-diciembre 2016*. Monterrey, México.

CADHAC, (2017, abril 27) *En Reunión 28 con PGJNL, AMORES y CADHAC buscan nuevos caminos*. Boletín 1704/15. Disponible en <http://www.cadhac.org/comunicado/en-reunion-28-con-pgjnl-amores-y-cadhac-buscan-nuevos-caminos/> [Consultado el 29 de abril de 2019].

CADHAC, (2017, agosto 30) *10 años de búsqueda de personas desaparecidas en Nuevo León*. Boletín 1708/35. Disponible en http://www.cadhac.org/derechos_humanos/10-anos-de-busqueda-de-personas-desaparecidas-en-nuevo-leon/ [Consultado el 29 de abril de 2019].

CADHAC, (2018, enero 31) AMORES, CADHAC y PGJNL revisan expedientes y avances en reunión No. 30. Boletín 1801/04. Disponible en <http://cadhac.org/amores-cadhac-y-pgjnl-revisan-expedientes-y-avances-en-reunion-no-30/> [Consultado el 12 de marzo de 2019].

CIDH, (2014) *Derecho a la verdad en las Américas*. Disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf> [Consultado el 29 de abril de 2019].

Cubero, César (2016, agosto 30) “Efectividad del Grupo de Búsqueda es 0.2%: FUNDENL”, *Milenio*. Disponible en <https://www.milenio.com/estados/efectividad-grupo-busqueda-0-2-fundenl> [Consultado el 12 de febrero de 2019].

De la Fuente, Daniel (2016, enero 10) “Del dolor al activismo”, *El Norte*. Disponible en <https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=737335> [Consultado el 19 de mayo de 2019].

De León, Gisela, Krsticevic, Viviana y Luis Obando, (2010) *Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos*, Buenos Aires, CEJIL.

FUNDENL, (2015, noviembre 06) “1ª Brigada independiente de búsqueda de personas desaparecidas en Nuevo León”. *El Barrio Antiguo*, No. 127. Disponible en <http://www.elbarrioantiguo.com/1-brigada-independiente-de-busqueda-de-personas-desaparecidas-en-nuevo-leon/>

Newsweek Nuevo León, (2018, 01 de junio) *Apoyan colectivos de 4 estados exigencia de FUNDENL para no ratificar a Balderas Rodríguez*. Disponible

en<https://newsweekespanol.com/2018/06/apoyan-colectivos-de-4-estados-exigencia-de-fundentl-para-no-ratificar-a-balderas-rodriguez/> [Consultado el 29 de abril de 2019].

OACNUDH, (2006) *Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo*. Nueva York y Ginebra. Disponible en <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf> [Consultado el 2 de junio de 2019].

ONU, (2005) *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*. Disponible en <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/03/PDF/G0510903.pdf?OpenElement> [Consultado el 9 de enero de 2019].

ONU, (2006) *Estudio sobre el derecho a la verdad*. Disponible en <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=E/CN.4/2006/91> [Consultado el 9 de enero de 2019].

ONU, (2015, septiembre 11). *Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, A/HRC/30/38/Add.4. Disponible en https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/Informe-Seguimiento-GTDFI-ONU-Mexico-2015.pdf [Consultado el 15 de enero de 2019].

Patraca, Beatriz (2013, enero 10). “Yo busco a Roy”, *La Jornada de Oriente*. Disponible en http://www.lajornadadeoriente.com.mx/columna/tlaxcala/opinion/yo-busco-a-roy_id_18466.html [Consultado el 03 de junio de 2019].

Peña Calvillo, Rubén (2016, diciembre 04) “Rastrean con un dron y perra entrenada fosas clandestinas”, *El Mañana*. Disponible en <https://www.elmanana.com/rastrean-dron-perra-entrenada-fosas-clandestinas-dron-fosas-clandestinas-evidencias-zona-extermio/3523651> [Consultado el 03 de junio de 2019].

Pillay, Navanethem, (2012) “Establishing effective accountability mechanisms for human rights violations” en *UN Chronicle, The Magazine of the United Nations*. Vol. XLIX, Núm. 4. Disponible en <https://unchronicle.un.org/article/establishing-effective-accountability-mechanisms-human-rights-violations> [Consultado el 9 de junio de 2019].

Sin Embargo (2014, abril 13). “ONG en Nuevo León vuelve a colocar los nombres de 13 desaparecidos, retirados ‘misteriosamente’ de plaza”, *Sin Embargo*.

Disponible en <https://www.sinembargo.mx/13-04-2014/961684> [Consultado el 11 de febrero de 2019].

Villarreal, María Teresa, (2014) “Respuestas ciudadanas ante la desaparición de personas en México (2000-2013)” en *Espacios Públicos*. Vol. 17, Núm. 39, pp. 105-135.

Villarreal, María Teresa, (2015) “Las mesas de seguimiento de casos de personas desaparecidas, una experiencia de incidencia en Nuevo León, México” en *Revista Enfoques*. Vol. XIII, Núm. 23, pp. 85-97.